

Extrait du El Correo

<http://www.elcorreo.eu.org/Bolivia-y-el-retorno-de-la-extrema-derecha>

Bolivia y el retorno de la extrema derecha

- Les Cousins - Bolivie -

Date de mise en ligne : samedi 22 mars 2008

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

Por James Petras

[Econoticias](#). Bolivia, 17 de Marzo de 2008

Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzado al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.

El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera. El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.

En primer lugar, el gobierno del MAS logró canalizar las políticas a través de instituciones del Estado, a saber, las ramas electorales, parlamentarias y ejecutivas, socavando por tanto las tácticas de acción directa de los movimientos sociales, su instrumento más efectivo de la influencia política.

En segundo lugar, el equipo Morales-García Linera definió y distorsionó radicalmente varias de las demandas políticas y socioeconómicas populares principales a fin de acomodarse a los intereses de la oligarquía y del capital extranjero. Los pactos y acuerdos formales entre el gobierno y la oligarquía llevaron directamente a la rápida reconstrucción de la extrema derecha y a la desmovilización y debilitamiento estratégico de los movimientos sociales. Estos cambios políticos radicales pueden resumirse brevemente.

Asamblea Constituyente : del poder popular al revanchismo oligárquico

Una de las demandas políticas fundamentales de los movimientos sociales revolucionarios durante el período insurreccional (febrero de 2003 a junio de 2005) fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyos miembros provendrían de la elección directa de representantes de los movimientos sociales, comunidades indias y pobres rurales y urbanos. Morales y García Linera pervirtieron totalmente esta demanda. En un acuerdo formal con los desacreditados jefes de los partidos oligárquicos, el presidente y el vicepresidente organizaron elecciones basadas en las entidades territoriales existentes, en las que los partidos de extrema derecha se aseguraron la representación amplia necesaria para bloquear cualquier cambio radical a través de sus potentes máquinas de patrocinio y el control sobre el 90% de los medios de comunicación de masas. En las negociaciones previas a la constitución de la Asamblea, Morales y García Linera aceptaron una cláusula de votación de la oligarquía según la cual eran necesarios dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la Constitución. Más tarde, cuando la derecha entró en la Asamblea en número suficiente para bloquear todos y cada uno de los cambios sustanciales, o incluso las reformas de procedimiento, Morales y García Linera intentaron introducir una norma de mayoría simple pero fueron incapaces incluso de afectar el funcionamiento de la Asamblea. Después de casi un año y medio de parálisis, no se aprobó un solo artículo sustancial ; los movimientos sociales habían perdido todas sus esperanzas en la « refundación del Estado » y en la posibilidad de alcanzar cambios sociales significativos. La derecha utilizó la situación disfuncional de la Asamblea para organizar manifestaciones callejeras de masas y establecer « redes cívicas » potentes, dominadas por los oligarcas separatistas y sus fuerzas paramilitares, a fin de promover un programa en gran parte de derechas.

El vicepresidente García Linera reconoció, efectivamente, la debacle total de la Asamblea Constituyente y convocó una conferencia pluripartidista con participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y todos los partidos de extrema derecha, empresarios y oligarcas, a fin de resolver sus diferencias. En otras palabras, Morales y García Linera pasaron de un pacto político fallido con la oligarquía a otro con los mismos resultados desastrosos.

Como era de esperar, la oligarquía y la derecha consideraron la marginación de la Asamblea como una victoria y utilizaron el nuevo formato para impulsar su programa aún más agresivamente y exigir, en la práctica, la rendición total en todos los asuntos principales relativos a la agroindustria ; la ocupación ilegal de tierras públicas ; el separatismo (calificado de autonomía), que incluye el control provincial (departamental) total sobre los ingresos por impuestos y regalías, y un mayor control provincial (departamental) de las políticas sociales y económicas. La propuesta pluripartidista llevó rápidamente a un fin innoble, como la Asamblea Constituyente antes de ella, pero no sin antes reforzar aún más a la derecha, desmoralizar las clases populares y demostrar la quiebra de las políticas de Morales y García Linera de pactos políticos con los partidos oligárquicos. Al carecer incluso de la seguridad física más elemental en Sucre, la Asamblea Constituyente huyó primero a una instalación militar y más tarde a Oruro donde fue protegida por los mineros y aprobó una Constitución contradictoria y ambigua.

La nueva Constitución está sometida a la aprobación de los votantes en referéndum. Las cláusulas principales son una mezcla de cláusulas « centralista » y cláusulas « autónomas », que potencian el poder federal y fragmentan potencialmente el país en unas 30 a 60 « naciones indias » y en gobiernos regionalistas de derecha.

Declarando al mismo tiempo la intangibilidad de la propiedad privada, la Constitución reivindica limitar la propiedad de la tierra a 25.000 acres por persona, incluyendo la posibilidad de un cierto tipo de reforma agraria (la mayoría de la cual sería invalidada mediante el procedimiento de poner la tierra a nombre de los miembros de la familia ampliada.) La Constitución reivindica la propiedad del Estado de todos los derechos del subsuelo sin por ello denegar a todas las grandes empresas mineras, del gas y del petróleo todas las reservas subterráneas en su cotización según el mercado de valores. La Constitución refleja la ideología y las políticas profundamente contradictorias del gobierno de Morales y García Linera, que proclama cambios radicales pero aplica un programa liberal.

Ideología

En la base de estos desastrosos pactos políticos, tácticas y estrategias del gobierno actual, se halla la ideología del capitalismo andino basada en la idea de la protección de la propiedad privada (que incluye la élite de la agroindustria, ese 1% de la población que posee el 80% de las tierras fértiles), de empresas mixtas con multinacionales extranjeras que explotan los grandes recursos naturales, y con campesinos indios de pequeña propiedad basada en la comunidad.

Para sostener el proyecto económico capitalista, Morales y García Linera necesitaban la colaboración y el apoyo de los partidos de derecha oligárquicos, lo que condujo directamente a la firma de los tristemente famosos y fatales pactos políticos que socavaron totalmente las actividades y la dinámica de los movimientos sociales. El indigenismo y la retórica de la defensa de las comunidades indias han sido recursos retóricos rituales en boca de ambos líderes y desmentidos en la práctica, como demostraron concretamente sus supuestos socios, con la destrucción de la disidencia en su reducto económico de Santa Cruz.

Indigenismo

El segundo componente principal de la ideología de Morales y García Linera era la autonomía política indígena y local. La ideología del indigenismo varía en significado y uso según su exponente y propósito político. En Bolivia hoy

ambos líderes hablan de indigenismo con varios significados contradictorios y confusos, en función del momento y lugar políticos. El énfasis principal se pone en los derechos culturales y políticos : reconocimiento de la igualdad legal, respeto de las normas culturales indias y sus prácticas jurídicas y reconocimiento del derecho al autogobierno y la autonomía por parte de las 39 a 60 (dependiendo de las ONG y los antropólogos) naciones indias.

Morales y García Linera han puesto de relieve el carácter cultural y democrático de su « revolución », negando cualquier pretexto para la transformación de la propiedad y las relaciones sociales, la expropiación del capital extranjero o los 25 millones de hectáreas en manos de la clase dominante agroindustrial.

El reconocimiento de varias docenas de « naciones indias » implica la fragmentación total de Bolivia en una cadena de mini estados insostenibles, si se llegase a poner en práctica la ideología del indigenismo. Inútil decir que los dos líderes no tienen ninguna intención de poner en práctica la « autodeterminación » indígena, un concepto ideológico sin fundamento económico y político prácticos. Sin una redistribución fundamental de la tierra, una reforma agraria profunda que transfiera la tierra de los 100 clanes a 2 millones de indios sin tierra, lo que Morales y García Linera han rechazado categóricamente, la población india no tiene ninguna base económica para afirmar su autodeterminación.

Peor aún, el énfasis de la ideología indigenista de Morales y García Linera en la autonomía local (de departamento y municipal), ha sido aprovechado por la clase oligárquica de derechas que gobierna en seis departamentos (la media luna) como pretexto para poner en marcha un movimiento de secesión, tanto de jure como de facto, para hacerse cargo de la mayor parte de las regiones ricas en minerales y energía de Bolivia. En respuesta, Morales y García Linera han retrocedido y reafirmado la supremacía del gobierno central del Estado y su control total sobre los ingresos de exportación, la autoridad civil y el poder legislativo.

La ideología indigenista ha tenido poco o nada de impacto en el aumento de la renta y la resolución de las desigualdades de propiedad, los contratos con las sociedades multinacionales extranjeras, los gastos presupuestarios y los ingresos. Las festividades religiosas indígenas han sido financiadas por el Estado y la ideología indigenista ha dado una cierta legitimidad popular a la clase política, básicamente mestiza, que predomina en el gobierno.

Nacionalización

La inmoralidad del gobierno del MAS y su traición a las esperanzas y aspiraciones de los movimientos sociales revolucionarios y sus sacrificios políticos se evidencia claramente en el abandono total, por parte del gobierno, de la nacionalización de la energía y otros recursos materiales primarios. No se ha nacionalizado ni un solo pozo petrolero ni un gaseoducto a pesar de los chillidos de Morales asegurando que « nacionalización no equivale a expropiación ».

Por supuesto ; la continuación de la propiedad y el control extranjeros en la elaboración de las políticas no era expropiación, pero tampoco ha existido una nacionalización en el sentido que todos expertos, economistas, políticos, periodistas y académicos emplean este término.

Morales y García Linera simplemente aumentaron los pagos por royalties y los impuestos a los niveles de la mayor parte de los países capitalistas occidentales y muy por debajo de porcentajes que se aplican en Próximo Oriente, Asia y partes de Africa. Peor aún, el ajuste de precios al alza en la venta de gas a Brasil y Argentina estaban aún por debajo de los precios mundiales en un porcentaje de por lo menos un tercio o la mitad. Después de lograr lucrativos y provechosos contratos a largo plazo, Petrobras de Brasil y Repsol de Argentina decidieron hacer nuevas inversiones de gran envergadura para el aprovechamiento de recursos bolivianos. Es decir, que Morales y García

Linera ampliaron y profundizaron la desnacionalización de la economía a un coste enorme para la clase trabajadora y los pobres de la ciudad y el campo, que ven poco o nada de unos ingresos cada vez mayores.

De acuerdo con sus políticas favorables al capital extranjero, Morales y García Linera firmaron un acuerdo con la multinacional india Jindal para aprovechar una de las tres minas principales de hierro y manganeso de América Latina. La cordillera de Mutún fue desnacionalizada, se privatizó y se liquidó en condiciones sumamente favorables para sus nuevos dueños extranjeros. El acuerdo propuesto de industrializar el mineral de hierro implica el tratamiento mínimo del mineral en lingotes y tendría lugar después de que Jindal recuperase su inversión inicial. Morales y García Linera han firmado contratos con casi todas las multinacionales extractoras oligárquicas y extranjeras existentes en Bolivia. Por otra parte, Bolivia ha incrementado su dependencia del capital extranjero al aceptar la participación de nuevos explotadores foráneos. A principios de 2008, cuarenta y dos empresas de gas y petróleo de propiedad extranjera explotan los campos energéticos bolivianos.

A excepción de un par de operaciones muy marginales, el gobierno boliviano no ha nacionalizado ni una sola mina, pozo petrolero o campo de gas de propiedad extranjera. Pagaron un precio excesivo por dos refinerías propiedad de Petrobras. Y lo que es peor, las condiciones de propiedad extranjera siguen siendo tan desfavorables como siempre. En casi todos los casos el estado boliviano aparece como socio minoritario, con poca influencia sobre las decisiones de inversión, producción y comercialización. En segundo lugar, los dueños extranjeros obtienen préstamos subvencionados del Estado boliviano, con un porcentaje medio del 3%, para financiar gastos corrientes. En cambio, el Estado boliviano pide préstamos al 8% al Banco Andino (Corporación Andina de Fomento). Las empresas extranjeras reciben gas a precios subvencionados. El gobierno boliviano no ha hecho cumplir o poner en práctica viejos o nuevos acuerdos y no ha iniciado un sólo proyecto industrial de gran envergadura, confirmando con ello la economía de estilo colonial de Bolivia.

La lista de multinacionales extractoras extranjeras con influencia dominante en la economía boliviana incluye a Petrobras (Brasil), Repsol (España), Transredes (Enron-Shell), Jindal (India), Total (Francia), British Gas, Apex Silver (EEUU), Sumitomo (Japón), Ashmore (Gran Bretaña), British Petroleum y docenas de otras empresas importantes, que siguieron ganando miles de millones de dólares entre 2006 y 2008. En total, 42 multinacionales extranjeras dominan las industrias del gas y el petróleo bolivianos, una de las cifras más altas de todo el mundo.

Hay datos que confirman que el gobierno boliviano ha firmado más contratos de explotación, muy favorables para las empresas, con más corporaciones multinacionales del petróleo, la minería y el gas que cualquier otro país de América Latina. El hecho de que la mayoría de los nuevos contratos impliquen la exportación de las materias primas, significa una carencia de recursos energéticos para desarrollar el consumo interno de Bolivia y generar empleo industrial y comercial.

Reforma agraria

Después de dos años en el poder y a pesar de repetidas promesas demagógicas a las comunidades indias y campesinas, Morales y García Linera han fracasado totalmente en la ejecución de cualquier tipo sustancial de reforma agraria, y más todavía en lo que se refiere a tierras fértiles, productivas y de fácil acceso a los mercados, de los oligarcas y agro-exportadores más poderosos y más ricos. Al contrario, el régimen, desde el principio, dio garantías categóricas de que defendería a los « productores productivos » con independencia del tamaño de sus explotaciones, algunas de ellas de cientos de miles de hectáreas. Los niveles masivos de desposesión de la tierra y de pobreza (70%) continuaron, como en el pasado, entre los electores rurales del gobierno. Morales y García Linera se explayaron sobre « la expropiación de las explotaciones improductivas e ilegales » (tierras públicas arrebatadas y ocupadas por los terratenientes), pero a partir de finales de 2007, se había redistribuido poca tierra.

Según un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cien familias son

propietarias de 25 millones de hectáreas de la tierra más fértil, mientras que dos millones de agricultores y campesinos pobres poseen cinco millones de hectáreas de tierra sobrexplotada. En el departamento clave de Santa Cruz, según el propio Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), 15 clanes familiares poseen 500.000 hectáreas de tierras fértiles colindantes con los mercados y centros de transporte.

Los poderosos clanes « de los 100 mayores terratenientes » son los mayores propietarios, accionistas y consejeros de los principales bancos de Bolivia, emisoras de televisión, plantas de embalaje, industrias de procesos alimentarios, supermercados y empresas de comercio exterior.

En el departamento de Beni, 10 familias poseen 534.000 hectáreas. En Pando, 8 familias poseen un millón de hectáreas de tierra fértil. Esta estructura de poder clan-familia oligárquica se extiende mucho más lejos del reino económico. Los miembros del clan ocupan posiciones importantes en la alta judicatura, administrativa y militar, en los medios de comunicación de masas y en las instituciones civiles.

El régimen de Evo Morales y García Linera ha garantizado repetidamente la inviolabilidad de la propiedad de la oligarquía, así como su fuerza sobre el crédito público (el 80% del cual va a la élite de la agro-exportación). Con el apoyo económico gubernamental, la oligarquía domina la maquinaria política y la utiliza para intimidar, y frecuentemente atacar, a los partidarios del régimen de Morales con impunidad. Como resultado, la oligarquía ha intensificado su férreo dominio en los cinco estados orientales de Bolivia. Mediante la fuerza, la intimidación y la persuasión, la oligarquía tiene la hegemonía sobre las clases bajas en sus regiones.

En lugar de enfrentarse a la oligarquía, Morales y García Linera han pretendido reclutarla. En Pando, ofrecieron a un importante oligarca, el gobernador Fernández, un cargo en su gobierno. El gobernador Fernández lo rechazó, porque no tenía ningún deseo de tener nada que ver con los « indios ».

Ganancias y política fiscal

Las « políticas económicas estructurales » diseñadas por Morales ampliaron el poder y la riqueza de la oligarquía y del capital extranjero. Las políticas socioeconómicas del régimen fracasaron en elevar el nivel de vida. En su campaña electoral de 2005, Morales prometió duplicar el salario mínimo y aumentar sustancialmente los sueldos de los obreros, los maestros y los trabajadores sanitarios.

Dado el masivo aumento de la renta pública debido a los extraordinarios precios del mercado mundial para las exportaciones bolivianas de energía y metales, el régimen estaba en una buena posición para financiar aumentos sustanciales para los mal pagados empleados públicos y los trabajadores del sector privado. Nada de esto sucedió. El salario mínimo para 2008 aumentó un 10% -de 70 a 76 dólares al mes-. Con la actual tasa de inflación del 11%, el aumento real fue de 1 dólar al mes, con mucho, el salario mínimo más bajo de América Latina, en el momento de mayor acumulación de reservas extranjeras (5.000 millones dólares bajo las bóvedas del Banco Central) en Bolivia.

Aún peor, a los maestros públicos y trabajadores se les concedió un incremento salarial del 6% -en realidad una disminución si tenemos en cuenta la inflación-, en un momento en el que la oligarquía del agro-negocio, la energía de titularidad extranjera y las compañías petroleras cosechaban grandes beneficios del registro.

El régimen de centro-izquierda de Morales y García Linera ha tenido un severo efecto negativo en la organización y actividad de los movimientos sociales. Ha fortalecido y aumentado el poder institucional de los partidos de derechas y ha atrincherado al poderoso capital extranjero en todos los sectores estratégicos de la economía. Las políticas centrales, las políticas de rentas de los anteriores y desacreditados regímenes neoliberales permanecen intactas y los programas de mejora, pobremente dotados, han tenido poco impacto en los niveles de vida de los indios, obreros

y empleados públicos.

La política fiscal ortodoxa del FMI de Morales y García Linera y su manipulación de los símbolos indigenistas están aportando poco a los sectores crecientes de la clase obrera, a los mal pagados empleados públicos (maestros, trabajadores sanitarios), a los pequeños y medianos empresarios del transporte y la minería, estudiantes y profesores universitarios, gobiernos municipales y trabajadores públicos. Los paros laborales, las huelgas, barricadas y protestas cívicas se han multiplicado por el declive de los salarios reales entre los maestros de la escuela pública, el personal hospitalario, médicos, enfermeras, camioneros, cooperativas de mineros y otros. Morales respondió a las huelgas de los empleados públicos con reducciones en los sueldos, represión contra los mineros huelguistas de Oruro y con decretos ejecutivos. El doble discurso de Morales y García Linera ha conducido a agrias confrontaciones entre sus partidarios originarios. Por ejemplo, persiguiendo el voto de los pensionistas, Morales aumentó las pagas y rebajo la edad la edad de jubilación ; una medida loable. Sin embargo, en lugar de utilizar el excedente de las reservas externas, Morales transfirió el 30% de los recursos destinados a los gobiernos municipales y estatales y a las universidades, con un impuesto de hidrocarburos para financiar los costos del aumento de pensiones, que provocó protestas cívicas masivas. Aún peor, el ministro de Minas de Morales, que captó el apoyo de las cooperativas de mineros (empresas pequeñas y medianas) decidió cooperativizar una gran mina sindical, en detrimento de la clase trabajadora minera. Tuvo lugar una confrontación armada y murieron más de dos docenas de personas. Como resultado, Morales nacionalizó las minas, pacificó a los mineros y expropió las cooperativas mineras. Morales ha adoptado la táctica de amenazar a los trabajadores públicos en huelga con represalias de sus leales indios campesinos que componen el sector más bajo de su máquina de patrocinio electoral.

A pesar de su abrazo a las políticas fiscales del FMI, la expansión de la explotación privada extranjera de las materias primas de Bolivia y sus subsidios al agro-negocio, los precios al alza de las exportaciones agrarias, energéticas y de metales, han permitido al régimen mantener su máquina de patrocinio de masas y subvenciones a líderes indios « populares » y líderes sindicales. La acción de la clase independiente es esporádica ; la derecha controla gran parte de la acción cívica y en la izquierda no hay ninguna alternativa política en el horizonte, sobre todo a medida que se profundiza la confrontación entre Morales y la oligarquía política de la derecha.